

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ACUERDO NÚMERO: CTFGJEZ/UT/031/2024

NÚMERO DE FOLIO: 321103824000292

LCDO. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Presidente del Comité de Transparencia, **LCDO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ**, Vicefiscal de Apoyo Procesal y Vocal del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el **MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité de Transparencia, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren el artículo 11 apartado H, 13 fracción III, 19, 20 fracción V, 25 y 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; 27, 28, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 6, 8, 113 y 116 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracción VIII, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y,

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la información pública, presentada por **Sin Dato** a través del Sistema Nacional de Transparencia, ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y,

RESULTANDO

PRIMERO. - El 08 de julio de 2024, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió una solicitud de información de **Sin Dato**, por medio del cual requiere a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo siguiente:

Solicito información de los siguientes servidores públicos; la Mtra. Deysi Janett Montes Márquez y el Lic. Diego Alfonso Dorado, cargo que ostenta actualmente y anterior al ingreso a la Institución, antigüedad laboral, categoría que tiene actualmente, sueldos y salarios de los últimos dos años, versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales de los últimos dos años, curriculum vitae, título universitario, cédula profesional, así como si han sido sujetos a carpeta de investigación ante la misma Fiscalía o acreedores a faltas administrativas. De Verónica Fajardo Lamas, si ha sido sujeta a carpeta de investigación ante la Fiscalía o acreedora a faltas administrativas.

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se admitió a trámite la solicitud de información de **Sin Dato** con el número de folio **321103824000292**.

TERCERO- En términos de lo establecido en el ordinal 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se turnó la solicitud de información a la Dirección General de Administración, por ser la encargada de la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General, ello de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, respuesta que fue emitida mediante oficio MEM/DGA-295/2024 de fecha 05 de agosto de 2024, mediante el cual se informa lo relativo al cargo, antigüedad laboral (ingreso), la categoría actual, sueldos, currículum, título universitario y cédula profesional de Deysi Janett Montes Márquez. Respecto a Alfonso Dorado Cuevas se informa que ostenta una plaza de personal operativo, por tal motivo, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la reserva de la información personal y curricular de dicho servidor público, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas se encuentra facultado para conocer, dictar los acuerdos necesarios y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 apartado H, fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; artículos 8, 43, 44, 103, 104, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia, así como lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 82 fracciones I y III, 83, y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. - El folio que nos ocupa, solicita, entre otras cosas, el acceso a la antigüedad laboral, el título, la cédula profesional y los datos relativos a la existencia de carpetas de investigación o expedientes de presunta responsabilidad administrativa, en los que hayan participado en calidad de responsables las personas señaladas en el resultando tercero del presente acuerdo, al respecto, es oportuno considerar:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en su artículo **3, fracción VIII**, define a los datos personales como:

***"Datos Personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Con base en lo anterior, los datos personales los podemos clasificar como:*

***a) Datos personales sensibles:** Aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o*

conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa, **se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico**, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; y
(...)" (sic)

En esa tesitura, la antigüedad laboral, el título y la cédula profesional de una persona revela información sensible del titular de la misma, respecto a su experiencia, pues con estos se podría hacer un juicio de valoración de su desempeño en el encargo y por ende, constituirse en un acto discriminatorio por lo que se encuentra clasificada como información **confidencial**.

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 116, establece:

"Artículo 116. Se considera información confidencial **la que contiene datos personales** concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

(...)"

En armonía con lo anterior, el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, establece:

"Artículo 85:

*Se considera información confidencial **la que contiene datos personales** concernientes a una persona identificada o identificable.*

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello

(...)"

A mayor abundamiento, el **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)**, ha manifestado de manera reiterada que los datos personales solo conciernen al titular de la misma y que el sujeto obligado debe proteger la dignidad de las personas trabajadoras y omitir la intrusión a su vida privada, si bien es cierto que, ante ciertas circunstancias puede tener acceso a

información personal, eso no lo faculta para escoger de manera libre los medios de acopio de los datos personales o el tratamiento a realizar

Consecuentemente, no es factible llevar a cabo la entrega de la información relativa a su antigüedad en la vida laboral ni a documentos que contengan datos académicos como el título y la cédula profesional de las personas señaladas en la solicitud de información que nos ocupa.

TERCERO.- En lo referente al cargo actual de Deysi Janett Montes Márquez, categoría, sueldo, currículom y declaración patrimonial de la servidora pública se hace de su conocimiento que esta información es pública y consultable en el sitio de internet <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>, donde se encuentra la opción para acceder a la "información pública", se debe seleccionar en el recuadro "Estado o Federación:" Zacatecas; "Institución:" Fiscalía General de Justicia del Estado y "Ejercicio:" 2024; posteriormente se selecciona la opción, "2do trimestre" y se selecciona "Consultar". Para efecto de acceder al cargo, ingresar al apartado directorio: "denominación del cargo y área de adscripción". Para acceder a la categoría: ingresar al apartado "denominación del cargo y área de adscripción". Para acceder al sueldo: "sueldos" "monto de la remuneración bruta y neta". Para acceder al currículom: "curricula de funcionarios". Para acceder a la versión pública de la declaración patrimonial: "declaraciones patrimoniales". Para acceder a las sanciones administrativas: "servidores públicos sancionados".

Respecto del título profesional y la cédula, constituyen datos personales cuyo riesgo es bajo, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto a la protección del derecho a la intimidad e identidad personal, señalando que, al constituir un derecho personalísimo, otorga la posibilidad al individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y el poder de decisión respecto de la publicidad de los mismos. Es por eso que, con base en el principio de consentimiento, la titular de dichos datos personales manifiesta su voluntad de mantener ajeno del conocimiento público, los documentos que dan cuenta de su preparación académica y profesional.

Respecto a Diego Alfonso Dorado se le informa que los datos solicitados son de naturaleza reservada toda vez que ocupa un puesto de personal operativo.

CUARTO. - Por otro lado, la solicitud de información que nos ocupa, requiere que se proporcione, respecto a las tres personas mencionadas en el resultando tercero del presente acuerdo, la información relativa a si han sido sujetos a carpeta de investigación ante la misma Fiscalía o acreedores a faltas administrativas.

Por lo que a fin de resolver respecto a dicha solicitud de información se considera lo siguiente:

El artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la información que posee cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en su artículo 39 fracciones VII, VIII, XII y XVII respectivamente, establece que **se considera información pública**: el directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente y deberá incluir al menos el nombre, **cargo**, número de teléfono, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; **La remuneración bruta y neta** de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; la información en **versión pública de las declaraciones patrimoniales**; la **información curricular**, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado así como en su caso, las **sanciones administrativas** de que haya sido objeto, respecto de la existencia de carpetas de investigación y expedientes que se hayan integrado por una presunta responsabilidad administrativa.

En ese sentido, el derecho de información no es absoluto, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Aldea los Josefinos vs. Guatemala* determinó que **los Estados tienen la obligación de asegurar que sus funcionarios estatales cuenten con las debidas garantías de seguridad para llevar a cabo sus funciones en la investigación del delito**. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 36 estableció que los Estados deben **adoptar medidas que protejan a los funcionarios de seguridad pública de amenazas, agresiones y cualquier otro acto o represalia**.

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su ordinal 113 fracciones I, V y VII, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en sus artículos 4 y 82 fracciones I y III; establecen excepciones a esa obligación al permitir clasificar la información como reservada cuando: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; obstruya la prevención o persecución de los delitos.

En esa tesitura, resulta procedente realizar la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que se analiza lo siguiente:

a. **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;** dar a conocer la información relativa a datos jurisdiccionales alude a información que permite identificar hábitos de comportamiento de las personas de quienes se requiere la información, colocándolos en consecuencia en un estado de vulnerabilidad.

Al respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió en Junio de 2015, la "**Metodología de Análisis de Riesgo BAA**"¹, documento que clasifica como **riesgo inherente medio los datos jurídicos, tales como antecedentes penales, amparos, demandas, contratos, litigios o cualquier otra información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa.**

En el mismo documento, el Instituto estableció que las **personas de alto riesgo** son aquéllas cuya profesión, oficio o condición **están expuestas a una mayor probabilidad de ser atacadas debido al beneficio económico o reputacional que sus datos personales pueden representar para un atacante.**

Es importante considerar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, es la institución encargada de la investigación de los delitos del orden común y persecución de los responsables en aras de procurar justicia a las víctimas de los delitos, en esa tesitura, los servidores públicos de la institución, por las labores que desempeñan, se encuentran sujetos a un mayor grado de riesgo o vulnerabilidad respecto a los servidores públicos de otros sujetos obligados.

En esa tesitura, no pasa desapercibido para este Comité la situación de inseguridad que prevalece en el estado de Zacatecas, pues si bien, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado se está haciendo un enorme esfuerzo para abatir la impunidad y, en consecuencia coadyuvar a la disminución de la incidencia delictiva, no es menor que con base en los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Geografía, la Ciudad de Zacatecas y Fresnillo continúan siendo de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, lo cual, no resulta menor, considerando que el pasado 07 de julio de 2024, como es del conocimiento público, un elemento de la Policía de Investigación de este Organismo, fue privado de la vida al terminar su guardia.

¹ Foja 06, consultable en

[https://inicio.inai.org.mx/DocumentosdelInteres/Metodolog%C3%ADa_de_An%C3%A1lisis_de_Riesgo_BAA\(Junio2015\).pdf](https://inicio.inai.org.mx/DocumentosdelInteres/Metodolog%C3%ADa_de_An%C3%A1lisis_de_Riesgo_BAA(Junio2015).pdf)

Lo anterior, se concatena con la incidencia delictiva de esta entidad federativa, en la que concurre la comisión de delitos de alto impacto como son: el secuestro, la extorsión, el homicidio y la privación ilegal de la libertad, de los cuales, como ya se ejemplificó, no están exentos los servidores públicos de la institución, pues incluso, se tiene documentada la desaparición de personal en el año 2022 y 2023 como es el caso de las víctimas de iniciales JPC (desaparecido en 2021), JMLR (desaparecido en 2022) y ADD (desaparecido en 2023), respectivamente, de quienes a la fecha se desconoce su paradero.

Por lo anterior, en el caso que nos ocupa se considera que la información del personal de Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, cuya obligación legal no sea hacerla pública, se considera de naturaleza sensible, pues permite identificarlos y con ello colocarlos en un escenario en el que se encuentren bajo ataques directos o amenazas por las organizaciones criminales.

Lo anterior permite concluir que ésta información revelará a detalle las características funcionales del personal y por tanto la organización para el cumplimiento de las funciones de esta Fiscalía General de Justicia, afectando en consecuencia la operatividad de la Fiscalía como órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos del orden común, máxime si se considera que atendiendo al tipo de funciones que realizan tienen acceso a información privilegiada relacionada con investigaciones en curso, que pudieran traer aparejadas grandes riesgos para el personal, como los ya señalados.

En ese sentido, cobra relevancia lo que estipula el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala:

"Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esa Ley."

De igual forma, en el artículo 40 fracción XXI del mismo cuerpo de leyes, se establece la obligación de las instituciones de Seguridad Pública de proporcionar información a quien no tenga derecho información reservada o confidencial.

"Artículo 40: Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y

respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

(...)

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; " (sic)

Ahora bien, si la información que se requiere en la presente no alude a personal netamente sustantivo, es importante considerar que este personal tiene injerencia en la elaboración de planes de trabajo, informes y análisis de la información que generan las y los Fiscales del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, esto es, la Institución funciona como un todo, por lo que no es menor la labor que desempeñan en relación con el tipo de información que manejan y, en consecuencia con la operatividad de esta Institución.

En esa tesitura, el **artículo 82** de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, señala que **la obtención y tratamiento de los datos personales a cargo de instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos.**

En relación a la existencia de carpetas de investigación y expedientes por presuntas faltas administrativas **de las tres personas mencionadas**, se precisa lo siguiente:

Respecto de carpetas de investigación ante la Fiscalía o acreedores de faltas administrativas: Este organismo autónomo, en su calidad de sujeto obligado, se encuentra imposibilitado para emitir cualquier manifestación respecto de la existencia o inexistencia de registros relacionados con antecedentes penales, faltas administrativas o responsabilidad administrativa, denuncias o quejas por la vía penal, civil o administrativa, toda vez que a cualquier persona que sea sujeto en calidad de presunto culpable dentro de una carpeta de investigación, le asisten diversos derechos humanos y fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, el cual se refiere a que toda persona acusada de cometer un delito se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso justo e imparcial. No obstante, su radio de protección se encuentra consagrado en diversos ordenamientos de naturaleza convencional, constitucional y legal, cito artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, artículo 14, fracción I del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, 3 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, les asiste el derecho a la intimidad y privacidad, señalado en el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido

de que en todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él.

Por otro lado, existe el deber de secrecía por parte del personal que tiene acceso a las carpetas de investigación, tal como refiere el artículo 106 del Código mencionado el cual señala que en ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del proceso penal. Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionado por la legislación aplicable.

Como ya quedó asentado, la información solicitada es de naturaleza confidencial, además de que versa sobre derechos humanos y fundamentales de las personas que se encuentran o podrían encontrarse sujetos a un proceso penal, por tal motivo no se puede proporcionar información sobre la existencia o inexistencia de una carpeta de investigación cuando no se tiene la calidad de sujeto procesal de conformidad con el párrafo segundo del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo que respecta al Lic. Diego Alfonso Dorado Cuevas, se le informa que se encuentra adscrito con una categoría operativa, lo cual su información queda bajo resguardo como información confidencial, en términos del siguiente razonamiento:

El Estado se encuentra en posibilidades de restringir el acceso a la información pública siempre y cuando sea demostrable que su difusión puede constituir un peligro a la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas, cuando las restricciones busquen proteger y respetar algún interés o bien jurídicamente tutelado, tales como la seguridad nacional, el orden público, la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, así como cuando se pone en riesgo la seguridad o la vida de las personas. Al respecto, en este asunto en particular, poner a disposición de terceros ajenos a la Institución información relacionada con el personal operativo adscrito a la misma, pone en riesgo la operatividad y el desarrollo de actividades de inteligencia a cargo de los mismo, es por eso que se debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación a fin de determinar el nivel de afectación que podría obtenerse con la divulgación de la información y el interés de la colectividad. El artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala el deber de respetar el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en los procedimientos penales, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales; el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública...; el párrafo último del artículo 39 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas señala que toda la información concentrada en los Registros que constituyen el Sistema de Seguridad Pública, entre otros, el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública tiene el carácter de reservada y confidencial.

Asimismo, el artículo 28 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el registro de integrantes del Servicio Profesional es la herramienta de seguimiento y control, y deberá contener información sistematizada, básica y técnica, relativa a la planeación de recursos humanos de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación. Los datos personales que se contengan en dicho registro, serán considerados como reservados y confidenciales, en términos de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución.

b. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; como se ha venido señalando la entrega de la información que se solicita pone en riesgo no solo a las personas de quienes se requiere ésta, sino también, a las funciones propias de esta Fiscalía General de Justicia, que es la investigación y persecución de los delitos del orden común, por lo que su entrega afecta directamente la seguridad pública del estado de Zacatecas, pues la información a la que pretende tener acceso el solicitante, vincula y hace identificable a los servidores públicos que cuentan con un alto grado de responsabilidad y, por ende, de peligro ampliando la probabilidad para que bandas del crimen organizado que constituyen un poder paralelo basado en terror y control territorial, debiliten las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública, lo que implica que se deben tomar medidas más radicales para hacerle frente.

No es menor, que una de las herramientas utilizadas por esas bandas, es la recopilación de información trascendental por cualquier medio, en ese sentido, la "teoría del mosaico" sostiene que, en materia de seguridad nacional, para determinar una reserva, no debe analizarse de manera aislada la información que se solicita, puesto que una información aparentemente inofensiva puede generar una afectación cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión de conjunto. Es importante tomar en consideración la utilidad que pudiera tener para "cualquier persona" obtener datos específicos del personal que integra esta institución.

c. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. La vida, la seguridad, la salud de las personas, así como el correcto desempeño del ejercicio del servicio público.

Al respecto, ha sido motivo de disenso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 325/2019, que la reserva de la información de los servidores públicos en las instancias de procuración de justicia, no se encuentra limitada únicamente a aquellos que realizan labores sustantivas, si no que esta reserva debe atender al tipo de funciones que desempeñan, con base en las cuales, tienen acceso a información sensible o privilegiada que, los coloca en una situación de vulnerabilidad.

Respecto a dicha resolución, es importante destacar lo manifestado por el Ministro Laynez Potisek en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 12 de mayo de 2022, en la que manifestó que la solicitud de información vulnera y afecta el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General; señalamiento que fue compartido por la Ministra Loretta Ortiz AHLF, quien considera que la información puede ser utilizada para realizar actos de contra inteligencia, que puedan mermar la facultad para la investigación y persecución de los delitos conferidos a las instancias de procuración de justicia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes de la materia.

En armonía con ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también se ha pronunciado de manera reiterada en los Criterios de Interpretación para sujetos obligados que la información relativa a los servidores públicos que presentan sus servicios en áreas de seguridad pública debe estar sujeta a un mayor sigilo, pues ésta puede ser utilizada por la delincuencia anulando, impidiendo u obstaculizando la función que desempeñan

CUARTO. - En términos de lo dispuesto en los artículos, 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 4, fracción VI del artículo 24, fracción II del artículo 44, 100 y párrafo segundo del 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos de la ley estatal en la materia, el Comité de Transparencia confirma la RESERVA DE LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en observancia y seguimiento a la solicitud de información 21103824000319 realizada mediante el Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, se

RESUELVE

PRIMERO. Se RESERVA LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los Estrados de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Así lo determinamos los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en Sesión celebrada el día 27 de agosto de 2024 en la Sala de Prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Zacatecas número 401, tercer Piso, Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas,

Zacatecas, quienes firmamos al margen y al calce la presente Acta y damos constancia para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ
Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción

**VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

LIC. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ,
Vicefiscal de Apoyo Procesal

**VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ
Titular del Órgano Interno de Control

Esta hoja de firmas pertenece al acuerdo número: **CTFGJEZ/UT/031/2024**, de fecha 27 de agosto de 2024, del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.